



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/HRC/WG.6/1/IND/3
6 de marzo de 2008

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
Primer período de sesiones del Grupo de Trabajo
sobre el Examen Periódico Universal
Ginebra, 7 a 18 de abril de 2008

**RESUMEN PREPARADO POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
PARA LOS DERECHOS HUMANOS CON ARREGLO AL PÁRRAFO 15 c)
DEL ANEXO DE LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS***

India

El presente informe constituye un resumen de las comunicaciones¹ presentadas por 37 interlocutores pertinentes para el examen periódico universal. Se ha preparado conforme a las directrices generales adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. No contiene opiniones, observaciones o sugerencias de parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) ni juicio o pronunciamiento alguno sobre afirmaciones concretas. La información incluida se acompaña sistemáticamente de referencias en notas y, en la medida de lo posible, los textos originales no se han modificado. La falta de información o de atención dedicada a determinadas cuestiones puede deberse a que los interlocutores no se han referido a ellas en sus comunicaciones. Los textos completos de todas las comunicaciones recibidas pueden consultarse en el sitio web del ACNUDH. Como la periodicidad del examen en el primer ciclo es cuatrienal, la información recogida en este informe se refiere principalmente a hechos ocurridos después del 1º de enero de 2004.

* El presente documento no fue objeto de revisión editorial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

I. ANTECEDENTES Y MARCO

A. Alcance de las obligaciones internacionales

1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) señaló que ha venido proporcionando la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, así como de la Convención sobre la Tortura². El Foro Popular para el examen periódico universal señaló asimismo que la India todavía no había ratificado, entre otros instrumentos, el Convenio Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes, la Convención sobre la eliminación de la discriminación, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y los Protocolos Facultativos 1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos³. Amnistía Internacional señaló asimismo que la India todavía no había formado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional⁴. La Red de pueblos indígenas y tribales de Asia (AITPN) y el Grupo de Trabajo internacional sobre los asuntos indígenas (IWGIA) destacaron que la India no ha ratificado todavía el Convenio N° 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes⁵.

B. Marco constitucional y legislativo

2. El Foro Popular para un examen periódico universal consideró que toda vez que los instrumentos internacionales no son de aplicación automática en la India, el Gobierno no había armonizado la legislación nacional con los tratados ratificados⁶.

C. Estructura institucional y de derechos humanos

3. La NHRC describió su función como complementaria de la del poder judicial. Declaró que se había ocupado de diversas cuestiones como la trata de mujeres y niños, la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la desaparición de personas, el desplazamiento de personas provocado por desastres, los conflictos y el desarrollo, el trabajo infantil, los casos de muerte y violación durante la detención, las prisiones y la discapacidad, no sólo examinando algunos casos concretos sino también publicando directrices de política destinadas a los organismos de ejecución⁷. El Foro Popular manifestó que no se aplicaban las directrices de las instituciones nacionales de derechos humanos, en particular sobre las violaciones, las muertes durante la detención y las muertes en los encuentros con las fuerzas de seguridad⁸.

4. El Foro Popular señaló que el Gobierno no había respetado los Principios de París en relación con la NHRC y con las comisiones para las mujeres, las minorías, las castas y las tribus registradas, los niños, y las tribus excluidas de los registros, ya que no se les habían concedido las atribuciones, los fondos, los recursos y la autonomía necesarios⁹. Según Human Rights Watch (HRW) los miembros y los presidentes de la NHRC son nombramientos políticos, lo que puede reflejarse en su funcionamiento. La NHRC no puede investigar de manera independiente las violaciones cometidas por las fuerzas armadas de conformidad con el artículo 19 de la Ley de protección de los derechos humanos¹⁰. También señaló que de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 de la ley, a la NHRC únicamente se le permitía tener conocimiento de las denuncias relacionadas con acontecimientos ocurridos durante el año anterior¹¹. HRW recomendó que se introdujesen modificaciones concretas en la ley para permitir a la NHRC investigar con independencia las denuncias de abusos cometidos por las fuerzas armadas¹². El Instituto de Relaciones Internacionales de Cachemira (KIIR) añadió que la NHRC no tenía jurisdicción legal sobre Jammu y Cachemira¹³.

5. La NHRC señaló que algunas regiones del país, como Jammu y Cachemira y la región del nordeste y algunos otros Estados, se enfrentan a la amenaza de la militancia y el terrorismo. Las fuerzas armadas de la Unión, incluidas las fuerzas paramilitares, se han desplegado en algunas de las zonas de disturbios con el fin de ayudar a las autoridades de los Estados a hacer frente a la situación de seguridad interna. En ocasiones, ha habido denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas que llevan a cabo las operaciones contra los terroristas y, al recibir estas denuncias, la Comisión pide a las autoridades competentes que presenten informes. El ejército ha distribuido directrices a los militares de todas las graduaciones sobre la observancia de los derechos humanos durante las operaciones en estas zonas¹⁴.

II. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE EL TERRENO

A. Cooperación con los mecanismos de derechos humanos

6. Amnistía Internacional lamentó que la India siguiera mostrándose renuente a cooperar con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas¹⁵. El Foro Popular señaló que el mayor país democrático no había extendido una invitación permanente a los procedimientos especiales¹⁶.

B. Cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

1. Igualdad y no discriminación

7. HRW observó que, pese a la existencia de leyes para proteger los derechos humanos, la India no había aplicado debidamente las leyes y políticas para proteger a sus comunidades marginadas, en particular a los *dalits*, los grupos tribales, las minorías religiosas, las mujeres y los niños¹⁷.

8. La NHRC observó que la estructura social, cultural y religiosa, predominantemente patriarcal y basada en la premisa de que el linaje, que se transmite a través de los varones, ha contribuido en gran medida al papel secundario que ocupa la mujer en la India. Esto ha constituido un fuerte incentivo para evitar los nacimientos de niñas en la familia, lo que ha provocado una reducción alarmante de la proporción entre niños y niñas. En algunas partes del país, los padres deciden abortar si el hijo esperado es una niña¹⁸. El Foro Popular señaló que en todo el norte de la India, la proporción entre el nacimiento de niños y niñas se ha invertido debido a los abortos cuando el feto es de niña¹⁹. El Foro Popular observó asimismo que la insuficiencia de los indicadores socioeconómicos y las deplorables estadísticas sobre educación y salud reproductiva y sexual ponen de relieve que las mujeres están cada vez más marginadas en los programas políticos y de desarrollo²⁰.

9. Según Christian Solidarity Worldwide (CSW) el sistema de castas ha seguido dominando y configurando la sociedad de la India en un alto grado, lo que ha repercutido negativamente en la consideración social, el trato y las perspectivas socioeconómicas de los *dalits* o castas registradas, que representan el 16% de la población total (al menos 167 millones)²¹. El Foro Popular y el IDMC (Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos) manifestaron que los *dalits* siguen siendo objeto de segregación y que se les niega el acceso a los lugares y servicios públicos, incluidos los lugares de culto, así como a la electricidad y el agua²². El Frente Democrático del Pueblo Tripura (TPDF) señaló que la discriminación contra los *dalits* se manifestaba en las desigualdades en la enseñanza, la discriminación económica, la discriminación religiosa, un sistema inadecuado de atención médica y violencia específica contra la mujer²³. CSW señaló que los *dalits* denuncian que son objeto de discriminación no sólo en las relaciones sociales normales sino también en su

interacción con la administración india. Según la experiencia de los *dalits* instruidos de las ciudades la discriminación revestía formas más sutiles, en particular en materia de empleo y ascensos²⁴. El Movimiento Internacional contra todas las Formas de Discriminación y Racismo (IMADR) y la Federación Luterana Mundial (LWF) destacaron que la falta de datos desglosados sobre algunos aspectos de la discriminación basada en la casta impedían un análisis a fondo y una planificación específica lo que puede contribuir a la discriminación contra los *dalits* y su derecho a la tierra, la vivienda, la salud, la educación y el empleo²⁵.

10. La Sociedad pro Pueblos Amenazados (STP) señaló que, a pesar de las garantías constitucionales existentes, durante generaciones, las tribus registradas o *adivasi* han sido objeto de distintos tipos de discriminación. En consecuencia, los *adivasi* sufren bajos niveles de salud, educación, seguridad alimentaria y representación políticas. Además de estos problemas, la cuestión primordial sigue siendo la de los derechos a la tierra de los *adivasi*²⁶. La AITPN y el IWGIA añadieron que muchos grupos tribales especialmente vulnerables están en vía de extinción²⁷. El Foro Popular se refirió también a la idea básica de la "Ley sobre los delincuentes habituales" de identificar a ciertos grupos tribales como "delincuentes habituales"²⁸.

11. El Foro Popular denunció que las minorías religiosas de la India sufren persecución, estigmatización y marginación en las esferas económica, social y política. El Comité Sachar también destacó este fenómeno en 2007²⁹. La Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC) señaló la lamentable tendencia a culpar de los incidentes "relacionados con el terrorismo" a las organizaciones islámicas, incidentes que la prensa difunde inmediatamente. Si las sospechas no se confirman, la prensa no rectifica indicando que los primeros informes eran erróneos³⁰. Cinco años después de la violencia entre comunidades de 2002, en el Estado de Gujarat, en el que perecieron más de 2.000 personas, a Amnistía Internacional le seguía preocupando que todavía perdurasen las consecuencias de dicha violencia para la minoría musulmana en Gujarat ya que abundan los informes sobre el boicot económico y social que sufren las comunidades musulmanas en Gujarat, y hasta 5.000 familias viven en "colonias de socorro" sin los servicios básicos y sin ser reconocidas por el Gobierno de Gujarat³¹. Partners for Law in Development (PLD) comunicó que el proyecto de ley sobre la violencia entre las comunidades, de 2005, había sido objeto de un amplio debate entre los miembros de la sociedad civil y había recibido fuertes críticas por no haber conseguido poner fin a la impunidad, o a la connivencia del Estado, ni reparar los delitos por razón de género³². El Foro Popular señaló que este proyecto de ley no definía el genocidio³³.

2. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

12. El Foro Popular señaló que las violaciones del derecho a la vida debido a las muertes en detención, las muertes en encuentros con las fuerzas de seguridad y el uso indiscriminado y desproporcionado de armas de fuego, eran un fenómeno generalizado. La NHRC denunció 136 casos de muertes en detención policial y 1.357 casos de muertes en detención judicial, así como 122 casos de muertes en encuentros con las fuerzas de seguridad, según cita del Foro Popular³⁴.

13. Según Liberation, en la India existe todavía toda una serie de leyes draconianas, presuntamente destinadas a poner fin al terrorismo pero que los agentes estatales utilizan en realidad para cometer abusos de los derechos humanos³⁵. Liberation y Action Aid India (AAI) indicaron que entre estas leyes figuraba la Ley de las fuerzas armadas (atribuciones especiales) de 1958 (AFSPA), promulgada por el Gobierno, la Ley de seguridad nacional de 1980 y la Ley modificada de prevención de las actividades ilegales de 2004³⁶. Liberation señaló que la Ley de las fuerzas armadas (atribuciones especiales) de 1958 seguía en vigor en Nagaland, Manipur, Assam y partes

de Tripura. Señaló también que en Jammu y Cachemira estaba en vigor una versión de esta ley, la Ley de atribuciones especiales de las fuerzas armadas (Jammu y Cachemira) de 1990³⁷.

14. El Foro de Asia Meridional para los Derechos Humanos (SAFHR) añadió que la utilización permanente de las leyes contra el terrorismo, las leyes sobre prisión preventiva y la AFSPA habían creado una situación en la que los métodos normales de "investigación" habían dado lugar a desapariciones, detenciones ilegales, tortura durante la detención, violencia sexual contra las mujeres y ejecuciones sumarias disfrazadas de encuentros armados³⁸. El Comité de Derechos Humanos Manipur (COHRM) observó que la invocación de la AFSPA durante medio siglo en Manipur había violado de manera flagrante derechos inderogables, en particular el derecho a la vida. En virtud del artículo 4 a) de esta ley, un suboficial del ejército indio puede disparar a matar por la simple sospecha de delitos definidos por el Gobierno. Los jóvenes de Manipur son las principales víctimas de las frecuentes ejecuciones extrajudiciales³⁹.

15. AAI y Liberation señalaron asimismo la legislación promulgada por los gobiernos de los estados, como la Ley de seguridad pública de Jammu y Cachemira de 1978, la Ley de las zonas de disturbios de Jammu y Cachemira, la Ley de protección pública especial de Chhattisgarh, de 2005 y la Ley de seguridad de las zonas especiales de Madhya Pradesh de 2002⁴⁰. El Centro de Organización, Investigación y Educación (CORE) y AAI recomendaron que se revocasen o revisasen las diferentes leyes nacionales y estatales⁴¹.

16. El KIIR señaló que, dos años después de haber sido revocada la Ley de prevención del terrorismo (POTA), no se habían revisado en el plazo previsto todos los casos iniciados en virtud de la ley. Además, el KIIR señaló la preocupación de las organizaciones de derechos humanos por las enmiendas introducidas en la Ley de prevención de actividades ilegales, que concedían facultades especiales a los Estados similares a las previstas anteriormente en la POTA⁴².

17. El Foro Mundial para la Paz (WPF) señaló que el artículo 4 a) de la Ley de atribuciones especiales de las fuerzas armadas (Jammu y Cachemira) autoriza a las fuerzas armadas de la India a "disparar o utilizar la fuerza, incluso provocando la muerte de cualquier persona", sin una orden de hacer fuego⁴³. La Ley de seguridad pública de Jammu y Cachemira (PSA) permite la detención administrativa de cualquier persona durante un año simplemente si cabe presumir que esta persona puede cometer en el futuro cualquier acto perjudicial para el mantenimiento del orden público o la seguridad del Estado, según señaló el WPF. En virtud del artículo 8 2) de esta ley, las autoridades tienen derecho a no revelar los motivos de la detención⁴⁴.

18. El Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos del Consejo Noruego para los Refugiados (IDMC) manifestó que en Jammu y Cachemira las violaciones y abusos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y los grupos militantes armados siguen siendo objeto de denuncias generalizadas. Según las estimaciones, al mes de marzo de 2005⁴⁵ habían perdido la vida 15.320 civiles como resultado de la violencia provocada por la militancia. El IDMC añadió que, en Assam, el Gobierno había desplegado importantes fuerzas de seguridad para combatir la insurgencia. Estas fuerzas han sido responsables de detenciones y arrestos arbitrarios, torturas y otros abusos durante las operaciones de búsqueda. El IDMC señaló que había habido denuncias de violaciones y abusos graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos por parte de todos: las fuerzas de seguridad, los maoístas y los cuadros de Salwa Judum, en el conflicto de Chhattisgarh⁴⁶.

19. El Centro Asiático de Recursos Legales (ALRC) señaló que la tortura no es un delito en la India. Para condenar por actos de tortura a un agente de las fuerzas de seguridad, este acto tiene que reunir todos los requisitos de cualquier otro delito de conformidad con el Código Penal de la

India. La ausencia de un organismo independiente para investigar los casos de tortura durante la detención es explotada por los que cometen los abusos, ya que saben que, aunque se haga una denuncia de tortura, ésta no se investigará debidamente⁴⁷. Amnistía Internacional señaló que se reconoce en general que los casos de tortura durante la detención policial están generalizados, en particular cuando se trata de miembros de grupos marginados, como también está generalizada la injerencia política y la corrupción, y que rara vez se aplican las salvaguardias para proteger los derechos de los detenidos⁴⁸.

20. El Centro India Trust de Prevención de la Tortura (TPCIT) observó que las condiciones en las prisiones siguen siendo deplorables en toda la India⁴⁹. El Foro Popular señaló que según las estadísticas de la NHRC correspondientes al año 2004, el 70% de todos los reclusos eran personas en espera de ser juzgadas⁵⁰. El TPCIT manifestó que, en 2005, se habían registrado en total 4.026 casos de violación de niños, y que el personal de los servicios de seguridad había cometido otros tantos casos de violación de niños⁵¹.

21. El SAFHR añadió que en casi todas las comisarías de policía de la India las personas "acusadas" eran normalmente maltratadas y objeto de abusos. Las investigaciones muestran que la mayoría de los pretendidos "delincuentes" sometidos a torturas y abusos en las comisarías de policía son pobres, pertenecen a las comunidades *dalits*, las tribus y las religiones minoritarias, como el Islam y el Cristianismo⁵². El TPDF señaló que los cristianos en la India son objeto de amenazas, agresiones físicas y encarcelamiento por propagar su fe⁵³. La organización Puertas Abiertas (OD) mencionó algunos casos en que a los miembros de las minorías religiosas, que habían sido objeto de palizas, desalojos y saqueos, entre otros abusos, los agentes de la policía local les negaba el derecho a presentar una "denuncia de primer incidente"⁵⁴. El TPDF señaló que los *sikhs* también eran con frecuencia víctimas de abusos por parte del Gobierno de la India⁵⁵.

22. Según el Foro Popular, las mujeres en la India siguen siendo objeto de violencias físicas, sexuales, emocionales y económicas. Las mujeres, en particular las pertenecientes a las tribus, a los *dalits* y a las minorías religiosas, pueden ser objeto de violencias sexuales y de género en situaciones de conflicto entre castas o comunidades⁵⁶. Según el informe anual sobre estadísticas nacionales de delincuencia correspondiente a 2005, se comete un delito contra las mujeres cada 3 minutos, una violación cada 29 minutos, un hostigamiento cada 15 minutos y un caso de muerte por razón de la dote cada 77 minutos⁵⁷. El Foro Popular señaló que, según las estadísticas nacionales de delincuencia, de los 22.832 casos denunciados por raptos y secuestro de mujeres, el 43% de estos casos eran por razones de matrimonio; 56.709 de los casos investigados por la policía en 2005 se referían a actos de crueldad cometidos por los esposos y parientes⁵⁸. La Coalición de jóvenes en defensa de los derechos sexuales y reproductivos (YCSRR) se refirió a un estudio realizado por el UNICEF y la organización no gubernamental Prayas que revelaba que un 53% de los niños de edades comprendidas entre los 5 y 12 años habían sido objeto de abusos sexuales, en la mayoría de los casos cometidos por los padres, tutores legales o miembros cercanos de la familia. Además, el estudio señalaba que más de la mitad de todos los casos de abusos sexuales y violaciones no eran denunciados⁵⁹.

23. Según el Centro pro Derechos Reproductivos (CRR), con frecuencia se celebran matrimonios ficticios con el fin de facilitar la trata de mujeres jóvenes para la prostitución⁶⁰. Sampada Gramin Mashila Santstha (SANGRAM) y VAMP señalaron también que la legislación en vigor no ha protegido los derechos y la seguridad de las personas que practican la prostitución y actividades sexuales⁶¹.

24. Los activistas *dalits* que prestaron testimonio ante la organización CSW afirmaron que un análisis por castas de las diversas formas contemporáneas de esclavitud en la India había revelado

que las principales víctimas, en una proporción abrumadora de casos, de la trata de personas, esclavitud sexual y otras formas de explotación eran *dalits* o miembros de las castas "inferiores", en particular del sistema de *devadasi*, personas en régimen de servidumbre y personas que se dedicaban a la recuperación manual de desechos. La CSW señaló que el cumplimiento de las leyes para prevenir esta explotación es totalmente insuficiente⁶². La NHRC señaló además que ha instado a las autoridades a que erradiquen la práctica perniciosa de la recuperación manual de desechos, y que de acuerdo con la directiva del Tribunal Supremo esto debe conseguirse plenamente para el año 2009⁶³.

25. El Foro Popular indicó que la situación de los niños seguirá siendo vulnerable debido a la falta de programas eficaces para combatir el trabajo infantil, la contratación de niños soldados, la violencia sexual contra las niñas y las condiciones deplorables de los menores en situación de conflicto con la ley. Los niños *dalits* y los miembros de las tribus son los más vulnerables a los abusos. La tortura y los castigos corporales están generalizados⁶⁴. La NHRC expresó también su profunda preocupación por el aumento del número de casos ante la justicia de menores y de casos de abusos sexuales⁶⁵. La organización Iniciativa Global para poner fin a todos los castigos corporales de los niños (GIEACP) señaló que los castigos corporales son ilegales en el hogar. No existe ninguna prohibición nacional en la ley de los castigos corporales en las escuelas, aunque estos castigos sí están prohibidos de acuerdo con la legislación de algunos Estados; y tampoco existe una prohibición explícita en situaciones de otros tipos de cuidados. El proyecto de ley que se está discutiendo, con el que se pretende prohibir los castigos corporales, mantiene el derecho a castigar al niño "si el daño causado a un niño es proporcional al acto cometido por el niño, si es razonable, y si no perjudica la integridad física corporal del niño"⁶⁶.

3. Administración de justicia y estado de derecho

26. La Iniciativa de Derechos Humanos del Commonwealth (CHRI) observó que el sistema de justicia penal de la India se caracteriza por el hacinamiento en los juzgados, las grandes demoras de los juicios y, sobre todo, por la corrupción⁶⁷. Según la información presentada por Foro Popular, hay al menos 28,6 millones de casos pendientes ante los tribunales de la India. En la actualidad, en la India sólo hay 10,5 jueces por cada millón de habitantes. El sistema de asistencia letrada se ha desplomado⁶⁸.

27. El Foro Popular consideraba que había una impunidad casi total para los "funcionarios públicos" y los políticos, y que esta cultura de impunidad agrava las violaciones de los derechos humanos, ya que los funcionarios públicos se consideran por encima de la ley⁶⁹. La CHRI manifestó que era necesario reformar urgentemente la policía de la India. En general, se considera que la policía está politizada, que no cumple debidamente su trabajo, que es brutal y que no se le exigen responsabilidades⁷⁰.

28. Amnistía Internacional señaló que aunque las investigaciones de los casos de muerte en detención son obligatorias en virtud del artículo 176 del Código de Procedimiento Penal, estas investigaciones se han llevado a cabo principalmente a raíz de un clamor popular. Sin embargo, las investigaciones siguen sujetas al control del poder ejecutivo, a diferencia de las investigaciones más independientes llevadas a cabo por los jueces. La policía se muestra con frecuencia renuente a aportar pruebas que puedan implicar a sus colegas, y se ha sabido de casos en que funcionarios superiores participan normalmente en el encubrimiento de las muertes resultantes de la tortura. Incluso en los casos en que las comisiones de encuesta completan su trabajo, los enjuiciamientos subsiguientes han sido poco frecuentes⁷¹.

29. HRW señaló que diversas leyes de la India hacen difícil o imposible enjuiciar a los autores de abusos cometidos por empleados del Estado. En particular, la policía y las fuerzas paramilitares están protegidas en virtud del artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que ningún tribunal reconocerá ningún delito supuestamente cometido por un funcionario público (incluidos los miembros de las fuerzas armadas) en el cumplimiento de sus deberes, sin la autorización expresa del Gobierno Federal. Este permiso para procesar raramente se concede, aunque la investigación muestre claramente que ha habido violaciones de los derechos humanos⁷².

30. HRW añadió que el ejército goza de inmunidad adicional cuando está desplegado en zonas de conflicto interno, conforme a la AFSPA. De conformidad con esta ley, no se iniciará ningún juicio, ni cualquier otra acción legal, salvo con la autorización expresa del Gobierno Federal, contra ninguna persona por ningún acto que haya cometido o se considere que ha cometido en ejercicio de las atribuciones previstas en esta ley⁷³. Según la CHRM, la invocación de la AFSPA viola el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la declaración de "estados de excepción", ya que se ha impuesto una excepción de hecho sin una declaración formal de ningún tipo de emergencia pública⁷⁴. CORE recomendó que se revocase la AFSPA⁷⁵.

31. El WPF señaló también que el artículo 22 de la Ley de seguridad pública de Jammu y Cachemira (PSA) ofrece protección contra el procesamiento, enjuiciamiento o actuaciones legales de todas las personas que actúen de conformidad con esta ley, y que esta inmunidad procesal ha dado lugar a que proliferen los casos de tortura, detención y encarcelamiento arbitrarios⁷⁶. HRW manifestó que se habían creado diversos comités para abordar las cuestiones relacionadas con la impunidad y la responsabilidad, en particular en las zonas de conflicto armado. Sin embargo, las conclusiones de estos comités con frecuencia no se publican o no se tienen en cuenta. HRW mencionó el caso de un comité encargado de revisar la Ley de atribuciones especiales de las fuerzas armadas, que presentó su informe al Ministerio del Interior en junio de 2005. Señaló asimismo que en abril de 2007, un grupo de trabajo sobre Jammu y Cachemira designado por el Primer Ministro también había recomendado que se revocasen las leyes que permiten la impunidad, como la AFSPA. El Gobierno de la India no ha tomado ninguna medida sobre ninguna de estas recomendaciones⁷⁷.

32. La Organización Mundial Barua (WBO) se refirió a la matanza cometida en Gujarat en 2002, y en particular al hecho de que la mayoría de los casos denunciados por las víctimas de la violencia nunca han sido investigados. Se ha intimidado a los testigos. Sólo se ha condenado una docena de culpables de bajo nivel⁷⁸. Amnistía Internacional recomendó que el Gobierno tomase medidas para investigar rápida y eficazmente los incidentes de violencia contra las comunidades musulmanas en el Estado de Gujarat, enjuiciar a los autores, incluidos los funcionarios del Gobierno y de la policía, y ofrecer reparación a las víctimas y a los sobrevivientes⁷⁹. En una declaración conjunta, Women's Research Action Group (WRAG) mencionó también el hecho que el gobierno del Estado de Maharashtra no había aplicado las recomendaciones de la Comisión Srikrishna, que había sido nombrada por el gobierno para investigar la violencia entre comunidades en Bombay en 1992-1993, un ejemplo de impunidad en gran escala por la violencia entre comunidades en la India⁸⁰. Además, en el caso de las cremaciones secretas en el Punjab, Ensaaf señaló que el Tribunal Supremo había designado a la NHRC para examinar todas las cuestiones planteadas por los peticionarios, concediéndole amplias facultades para reparar las violaciones de los derechos humanos fundamentales⁸¹. Amnistía Internacional señaló que el 9 de octubre de 2006 la NHRC había cerrado efectivamente el caso, sin investigar ningún caso de cremación ni registrar el testimonio de una sola familia de las víctimas, y basándose exclusivamente en las afirmaciones o negaciones de los organismos estatales para tomar sus decisiones⁸². La NHRC señaló que había recomendado que se indemnizase a los familiares, tanto de los 195 fallecidos en detención policial que han sido identificados como a las personas identificadas cuyos cadáveres habían sido objeto de cremación

por la policía del Punjab⁸³. Ensaaf recomendó que se supervisase el caso de las cremaciones en masa del Punjab, ya que es probable que sea revisado por el Tribunal Supremo de la India en 2008, aunque las violaciones de los derechos humanos tuvieron lugar en el decenio de los ochenta y en el decenio de los noventa⁸⁴.

4. Derecho a la intimidad, matrimonio y vida familiar

33. El Foro Popular señaló que no estaban garantizados los derechos de la mujer en la familia y en el matrimonio, en particular sus derechos de propiedad, sucesiones y alimentos, y que proliferaban los matrimonios de jóvenes: el 24% de los jóvenes de 15 a 19 años estaban casados⁸⁵.

34. La organización Asociados para el Derecho en el Desarrollo (PLD) destacó la solicitud presentada al Tribunal Superior de Nueva Delhi para que se revisase judicialmente la disposición que criminaliza los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo (según el artículo 377 del Código Penal de la India)⁸⁶.

5. Libertad de religión y de creencias, de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y derecho a participar en la vida pública y política

35. Según el Fondo Becket (BF) quizá el problema jurídico más inquietante para la libertad religiosa en la India sea la existencia de leyes sobre la "libertad de religión" que desalientan las conversiones (leyes contra la conversión). En la actualidad hay cuatro Estados de la India, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh y Himachal Pradesh, que aplican leyes contra la conversión. En Gujarat y Arunachal Pradesh hay leyes contra la conversión en espera de que se publiquen los reglamentos para su ejecución, y la ley contra la conversión del Rajasthan se ha trasladado al Presidente para que proceda a una revisión legal. Muchas de las leyes contra la conversión de los Estados de la India exigen que el converso registre su intención de convertirse a otra religión. Las leyes contra la conversión de algunos Estados discriminan contra las religiones de minorías o clases sociales específicas⁸⁷. La CSW señaló que, con arreglo a la legislación actual, los *dalits* que se convierten al Cristianismo o al Islam pierden su condición jurídica de casta registrada y, en consecuencia, su derecho a participar en el sistema de reservas basado en la acción afirmativa. Observó asimismo que la percepción de los *dalits* de que las conversiones religiosas constituyen un medio de eludir la casta se complica por el hecho de que en todas las comunidades religiosas de la India se practica hasta cierto punto el sistema de castas⁸⁸. El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia (ECLJ) señaló que "con frecuencia, estas leyes son invocadas, en particular por la población, para desalentar la conversión de los miembros de una religión mayoritaria hacia una religión minoritaria"⁸⁹.

36. La CHRI expresó cierta preocupación con respecto a la aplicación de la Ley sobre el derecho a la información, en particular la falta de conocimiento por parte del público de las disposiciones clave de la ley y el hecho de que la estructura de tarifas variaba considerablemente de un Estado a otro⁹⁰.

37. Reporteros sin Fronteras señaló que los medios de comunicación de la India son dinámicos, protegen sus libertades y desempeñan un papel esencial en el sistema democrático del país. Sin embargo, en los Estados agitados por rebeliones separatistas o maoístas, los periodistas se ven atrapados entre dos fuegos. Al menos 65 periodistas fueron agredidos o recibieron amenazas de muerte de los agentes de policía, criminales, directores de empresa o militantes políticos en 2006, y 2 periodistas fueron asesinados. En Cachemira, la policía no respondió a las repetidas consultas de la NHRC sobre casos de periodistas encarcelados⁹¹.

38. La organización Front Line (FL) señala que la legislación restrictiva contribuye también a agravar las violaciones de la libertad de reunión e impide que algunas organizaciones realicen sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos⁹². Según la CHRI el proyecto de ley sobre la reglamentación de las contribuciones extranjeras, que actualmente se encuentra en el Parlamento, prevé fuertes restricciones a la financiación extranjera de organizaciones clasificadas como "organizaciones de carácter político que no son partidos políticos". Esta clasificación y la facultad de conceder un certificado de registro por el que se autoriza a una organización a recibir fondos extranjeros, se deja a la discreción administrativa en el proyecto de ley, lo que reduciría considerablemente el espacio disponible para las actividades de la sociedad civil y las actividades de defensa en la India⁹³.

39. El CORE denunció que los defensores y las organizaciones de derechos humanos son normalmente víctimas de violaciones, incluidas las operaciones de registro y el cierre de los locales con diferentes pretextos, la confiscación de equipo y documentos, el hostigamiento, la detención por motivos falsos, violencia y amenazas de violencia a los miembros y a sus familias⁹⁴. A FL le preocupa el hecho de que los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones que el Gobierno considera sensibles, se encuentran en una situación de gran riesgo. Los agentes estatales recurren a la tortura, la detención preventiva ilegal o arbitraria, las desapariciones, los malos tratos, el uso de fuerza excesiva y la violación de las garantías procesales para impedir que los defensores de los derechos humanos lleven a cabo su trabajo legítimo y pacífico. Los defensores de los derechos humanos que investigan y se ocupan de las atrocidades cometidas por la policía y de la violencia durante la detención policial se encuentran en situación especial de riesgo, al igual que los defensores de los derechos humanos de los *dalits* y de las tribus, o los que defienden los derechos de los grupos marginados históricamente⁹⁵. Según FL varios defensores de los derechos humanos en el Punjab, Jammu y Cachemira, así como en los Estados del noreste, han sido asesinados⁹⁶.

6. Derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado

40. El Foro Popular observó que la denegación y privación de los derechos económicos, sociales y culturales conduce a una violación del derecho a la vida a través de los suicidios, el hambre y la inanición. Entre 1997 y 2005 cometieron suicidio 89.362 campesinos, una cifra asombrosa⁹⁷. El Foro Popular observó asimismo que aumenta la feminización de la pobreza debido especialmente al suicidio de los hombres⁹⁸.

41. El CRR señaló que el Gobierno de la India ha adoptado oficialmente una amplia gama de políticas y programas destinados a mejorar la situación de la salud reproductiva de la mujer, facilitando un amplio acceso a los servicios y a la información relacionada con la salud. Sin embargo, la aplicación de estos programas ha sido desigual e insuficiente⁹⁹. El CRR añadió que las complicaciones durante el embarazo y el parto figuran entre las causas principales de muerte de la mujer en la India. Las causas subyacentes de la mortalidad materna son la deficiencia de los servicios de atención sanitaria, la falta de acceso a servicios de planificación de la familia, los abortos en condiciones inseguras y la malnutrición. Estos factores afectan de manera desproporcionada a las mujeres de las zonas rurales. Una de cada seis muchachas indias tiene su primer hijo entre los 13 y los 19 años, y según el CRR menos del 10% de los adolescentes casados utilizan contraceptivos. Se cree que los abortos en condiciones inseguras son responsables de la mitad de las muertes de la madre entre las muchachas y las jóvenes entre 15 y 19 años. El CRR señaló también que en 2002 la India había enmendado su ley del aborto, la Ley de la terminación médica del embarazo, de 1971, pero que no hay pruebas de que la reforma de la ley haya permitido aumentar el acceso a unos servicios de aborto seguros, legales y económicamente asequibles¹⁰⁰. La YCSR declaró que en la India la mayoría de las escuelas no tienen en su programa de estudios

ninguna forma de enseñanza sobre la sexualidad, y recomendó que en la India se facilitase enseñanza global sobre la sexualidad en todas las escuelas públicas y privadas¹⁰¹.

42. La STP expresó su preocupación por la inquietante tasa de mortalidad entre los niños *adivasi* señalada por el Ministerio de Salud Tribal en su informe anual correspondiente a 2005-2006, una tasa de 84,2 muertes por cada 1.000 nacimientos que es muy superior al promedio de la India de 70%, y también a las tasas de otros grupos socioeconómicos desfavorecidos¹⁰².

43. La NHRC indicó asimismo que aunque en la India se había superado la situación de hambre, y el país había dejado de ser deficitario en alimentos, todavía había casos de inanición y malnutrición¹⁰³. Pese a los grandes avances en la realización del derecho a la alimentación en la India, la Food First Information and Action Network (FIAN) señaló que todavía había dificultades para cumplir la legislación en vigor y garantizar la aplicación de las decisiones de los tribunales y el acceso a la justicia para los pobres¹⁰⁴. La FIAN indicó que el cambio necesario, de un sistema de distribución pública (DS) a un sistema de distribución pública a objetivos concretos (TDPS) en 1997 no había contribuido a resolver el problema del hambre y la inanición de millones de personas. El TDPS se había adoptado únicamente para garantizar la seguridad alimentaria de las personas que vivían por debajo del umbral de pobreza. La propia pobreza no está claramente definida por el Gobierno, y los criterios para decidir qué personas se encuentran por debajo del umbral de pobreza son imprecisos¹⁰⁵. El ALRC observó que la gestión de este sistema adolece de corrupción, en particular en forma de mercado negro, así como de prejuicios por razones de casta, y también de falta de aplicación por los gobiernos locales. El ALRC denunció también que el hambre y la malnutrición afectan a un 53% de toda la población de la India¹⁰⁶.

44. La FIAN observó que la falta de acceso al agua potable y al agua para el riego, debido a la contaminación de los recursos hídricos, a la desviación del agua para fines industriales y a las medidas tomadas con miras a la privatización del agua, eran algunas de las amenazas al derecho al agua de la población de la India¹⁰⁷.

7. Derecho a la educación

45. El KIIR señaló que en Cashemira el 80% de los edificios escolares están ocupados por el ejército de la India y que, debido al temor en las fuerzas armadas, la población tiene miedo de enviar a sus hijos a las escuelas¹⁰⁸. AAI mencionó que aunque en 1993 se había prohibido la recuperación manual de desechos humanos, hay noticia de que 1.200.000 personas continúan recurriendo a esta práctica. Tan pronto como las familias renuncian a la recuperación manual de desechos, a sus hijos se les niegan las becas en virtud del programa para hijos de las familias que practican ocupaciones insalubres. Esto provoca el abandono escolar, en particular entre las niñas¹⁰⁹.

8. Desplazados internos

46. El Foro Popular observó que más de 84 millones de personas indígenas/tribales de la India, conocidas como tribus registradas o *adivasi*, seguían siendo víctimas de manera desproporcionada del "desarrollo", los desplazamientos y las expropiaciones¹¹⁰. La STP señaló que la mayoría de las tribus *adivasi* vivían en los bosques de regiones remotas y montañosas de la India central, el denominado "cinturón tribal" y que sus tierras contenían importantes yacimientos de recursos naturales como bauxita, mineral de hierro y carbón. En consecuencia, sus tierras han sido cada vez más víctimas del desarrollo industrial como consecuencia del rápido crecimiento de la economía de la India. Las operaciones mineras, los complejos industriales (concentrados con frecuencia en las zonas económicas especiales (SEZ)) y la construcción de infraestructuras, en particular embalses, han causado ya un perjuicio grave a las tierras *adivasi*, que amenazan de extinción a su cultura

particular¹¹¹. A Amnistía Internacional le preocupa cada vez más el hecho de que la falta de transparencia, participación y consulta con los propietarios de estas tierras, y la forma de adquisición de terrenos para proyectos industriales, haya provocado protestas entre las comunidades locales marginadas social y económicamente, por temor a ser desplazadas de sus tierras y sus hogares. En la mayoría de los casos, este desplazamiento supone también una amenaza para sus medios de vida que, para la mayoría, se basa exclusivamente en la producción de sus tierras¹¹². Según AAI las fuerzas de seguridad y la policía de la India han cometido violaciones y asesinatos para reprimir el movimiento genuino de protesta de la población contra la adquisición de sus tierras agrícolas para destinarlas a zonas económicas especiales y a una industrialización injusta. Varios gobiernos de los Estados de la India han adquirido las tierras, sobre todo de las comunidades tribales, *dalits* y agricultores, en virtud de la Ley de adquisición de tierras de 1894¹¹³.

47. Según el IDMC, al menos 600.000 personas se han visto desplazadas en la India por razones relacionadas con los conflictos y la violencia localizada¹¹⁴. Según el Ministerio de Asuntos Internos, citado por la AITPN, 21 de los 28 Estados son víctimas de conflictos armados, y la mayoría de estos Estados son víctimas de conflictos provocados por los *naxalite* (maoístas)¹¹⁵. La AITPN señaló que todas las zonas afectadas por conflictos armados internos, excepto Jammu y Cachemira están habitadas principalmente por pueblos indígenas y tribales, que constituyen más del 40% de los desplazados internos a causa de los conflictos en la India, y que sufren graves violaciones de los derechos humanos tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los grupos armados de la oposición¹¹⁶. El IDMC señaló que la principal situación de desplazados internos de la India tenía su origen en el conflicto de Jammu y Cachemira¹¹⁷. El IDMC añadió que el Gobierno de la India niega con frecuencia a las organizaciones humanitarias internacionales el acceso a los desplazados internos, alegando que los gobiernos locales se ocupan plenamente de las poblaciones afectadas¹¹⁸. Según el IDMC, la respuesta del Gobierno a los desplazados internos es con frecuencia puntual y totalmente insuficiente, y los desplazados internos se encuentran generalmente en una situación sumamente vulnerable¹¹⁹. El IDMC recomendó que la India adoptase una política nacional para los desplazados internos¹²⁰, y AAI recomendó que la India aplicase los principios rectores de las Naciones Unidas aplicables a los desplazamientos internos¹²¹.

9. Derecho al desarrollo

48. La NHRC manifestó que para que el derecho al desarrollo pudiera abordarse con seriedad en la política y en la acción era preciso atender antes dos retos. El primero establecer un concepto firme del desarrollo y el segundo determinar las medidas prácticas para aplicar este derecho.

III. LOGROS, PRÁCTICAS ÓPTIMAS, RETOS Y LIMITACIONES

49. El IMADR y la LWF se refirieron a la declaración hecha por el Primer Ministro de la India en diciembre de 2006 en la que comparó la práctica de los intocables en la India con el *apartheid* en Sudáfrica, como un hito en el reconocimiento de la discriminación social contra los *dalits*. Ambas organizaciones recomendaron que esta declaración pública fuese seguida de medidas efectivas a nivel nacional para aplicar garantías institucionales que protejan a los *dalits* de la discriminación¹²².

50. El SAFHR señaló los progresos realizados en años recientes en la India para institucionalizar la "transparencia en la gobernanza" con la promulgación de la Ley del derecho a la información¹²³.

IV. PRIORIDADES, INICIATIVAS Y COMPROMISOS NACIONALES ESENCIALES

51. [No disponible.]

V. FOMENTO DE LA CAPACIDAD Y ASISTENCIA TÉCNICA

52. [No disponible.]

Notas

¹ The following stakeholders have made a submission (all original submissions are available in full text on: www.ohchr.org):

Civil society

AAI	Action Aid India, UPR Submission, November 2007*;
AI	Amnesty International, UPR Submission, November 2007*;
AITPN and IWGIA	Joint submission by Asian Indigenous & Tribal Peoples Network and International Working Group on Indigenous Affairs, UPR Submission, November 2007*;
ALRC	Asian Legal Resource Centre , UPR Submission, November 2007*;
BF	The Becket Fund for Religious Liberty, UPR Submission, November 2007*;
CHRI	Commonwealth's Human Rights Initiative, UPR Submission, November 2007*;
COHRM	Committee on Human Rights Manipur, UPR Submission, November 2007;
CORE	Centre for Organisation Research & Education, UPR Submission, November 2007;
CRR	Centre for Reproductive Rights, UPR Submission, November 2007;
CSW	Christian Solidarity Worldwide, UPR Submission, November 2007*;
ECLJ	European Centre for Law and Justice, UPR Submission, November 2007*;
Ensaaf	Ensaaf, UPR Submission, November 2007;
FIAN	Food First Information and Action Network, UPR Submission, November 2007*;
FL	Front Line, UPR Submission, November 2007*;
GIEACP	Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, UPR Submission, November 2007*;
HRW	Human Rights Watch, UPR Submission, November 2007*;
IDMC	Norwegian Refugee Council (Internal Displacement Monitoring Centre,) UPR Submission, November 2007*;
IHRC	Islamic Human Rights Commission, UPR Submission, November 2007;
IMADR and LWF	Joint submission by the International Movement against All Forms of Discrimination and Racism* and the Lutheran World Federation* in association with the National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) and the International Dalit Solidarity Network (IDSN), UPR Submission, November 2007*;
Interfaith International	Interfaith International, UPR Submission, November 2007*;
KIIR	Kashmir Institute of International Relations, UPR Submission, November 2007;
Liberation	Liberation, UPR Submission, November 2007*;
OD	Open Doors International UPR Submission, November 2007;
OMCT	World Organization Against Torture, UPR Submission, November 2007*;

PF for UPR	Joint submission by People's Forum for UPR presented by Asia Centre for Human Rights on behalf of 129 organizations and 13 human rights defenders, UPR Submission, November 2007*;
PLD	Joint submission by Partners for Law in Development and 16 other NGOs, UPR Submission, November 2007;
RWB	Reporters Without Borders, UPR Submission, November 2007*;
SAFHR	South Asia Forum for Human Rights, UPR Submission, November 2007;
SANGRAM and VAMP	Joint submission by Sampada Gramin Mashila Santstha and VAMP, UPR Submission, November 2007;
STP	Society for Threatened Peoples, UPR Submission, November 2007*;
TPCIT	Torture Prevention Centre India Trust, UPR Submission, November 2007;
TPDF	Tripura People's Democratic Front, UPR Submission, November 2007;
WBO	World Barua Organization, UPR Submission, November 2007;
WRAG	Joint submission by Women's Research & Action Group and 23 other NGOs, UPR Submission, November 2007;
WPF	World Peace Forum, UPR Submission, November 2007;
YCSRR	Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights, UPR Submission, November 2007.

National Human Rights Institution

The National Human Rights Commission of India (NIHRC) **

NB: * NGOs with ECOSOC status; ** National Human Rights Institution with A-status

² National Human Rights Commission, UPR Submission, para. 28.

³ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, UPR Submission, November 2007, p. 11.

⁴ Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 3. See also Committee on Human Rights Manipur, UPR Submission, November 2007, p. 1 and 4.

⁵ Joint submission by Asian Indigenous & Tribal Peoples Network and International Working Group on Indigenous Affairs, UPR Submission, November 2007, p. 6.

⁶ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 12.

⁷ National Human Rights Commission, UPR Submission, paras. 6, 18 and 19.

⁸ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 11.

⁹ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 11. See also Joint submission by Asian Indigenous & Tribal Peoples Network and International Working Group on Indigenous Affairs, UPR Submission, November 2007, p. 3.

¹⁰ Human Rights Watch, UPR Submission, November 2007, p. 4. See also Centre for Organisation Research & Education, UPR Submission, November 2007, pp. 3-4.

¹¹ Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 3.

¹² Human Rights Watch, UPR Submission, November 2007, p. 5. See also Torture Prevention Centre India Trust, UPR Submission, November 2007, p. 1.

¹³ Kashmir Institute of International relations, UPR Submission, November 2007, p. 3.

¹⁴ National Human Rights Commission, UPR Submission, para. 15.

¹⁵ Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 3.

¹⁶ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 13.

¹⁷ Human Rights Watch, UPR Submission, November 2007, p. 1.

-
- ¹⁸ National Human Rights Commission, UPR Submission, para. 23.
- ¹⁹ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 6.
- ²⁰ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 6.
- ²¹ Christian Solidarity Worldwide, UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ²² Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 6 and Norwegian Refugee Council (Internal Displacement Monitoring Centre), UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ²³ Tripura People's Democratic Front, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ²⁴ Christian Solidarity Worldwide, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ²⁵ Joint submission by the International Movement against All Forms of Discrimination and Racism and the Lutheran World Federation in association with the National Campaign on Dalit Human Rights and the International Dalit Solidarity Network, UPR Submission, November 2007, p. 4.
- ²⁶ Society for Threatened Peoples, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ²⁷ Joint submission by Asian Indigenous & Tribal Peoples Network and International Working Group on Indigenous Affairs, UPR Submission, November 2007, p. 3. Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 7.
- ²⁸ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 8. See also Joint submission by Asian Indigenous & Tribal Peoples Network and International Working Group on Indigenous Affairs, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ²⁹ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 7.
- ³⁰ Islamic Human Rights Commission, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ³¹ Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 4.
- ³² Joint submission by Partners for Law in Development and 16 other NGOs, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ³³ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 8.
- ³⁴ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 3.
- ³⁵ Liberation, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ³⁶ Liberation, UPR Submission, November 2007, pp. 1-3 and Action Aid India, UPR Submission, November 2007, page 2. See also Centre for Organisation Research & Education, UPR Submission, November 2007, pp. 1-4.
- ³⁷ Liberation, UPR Submission, November 2007, p. 5.
- ³⁸ South Asia Forum for Human Rights, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ³⁹ Committee on Human Rights Manipur, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ⁴⁰ Action Aid India, UPR Submission, November 2007, page 2 and Liberation, UPR Submission, November 2007, pp. 1-3. See also Centre for Organisation Research & Education, UPR Submission, November 2007, pp. 1-4.
- ⁴¹ Centre for Organisation Research & Education, UPR Submission, November 2007, pp. 2-3; and Action Aid India, UPR Submission, November 2007, page 6.
- ⁴² Kashmir Institute of International Relations, UPR Submission, November 2007, p. 4. See also Torture Prevention Centre India Trust, UPR Submission, November 2007, p. 5.
- ⁴³ World Peace Forum, UPR Submission, November 2007, p. 8.
- ⁴⁴ World Peace Forum, UPR Submission, November 2007, p. 5, 7.
- ⁴⁵ Norwegian Refugee Council (Internal Displacement Monitoring Centre), UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ⁴⁶ Norwegian Refugee Council (Internal Displacement Monitoring Centre), UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ⁴⁷ Asian Legal Resource Centre, UPR Submission, November 2007, p. 4-5.
- ⁴⁸ Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ⁴⁹ Torture Prevention Centre India Trust, UPR Submission, November 2007, p. 5.

-
- ⁵⁰ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 3.
- ⁵¹ Torture Prevention Centre India Trust, UPR Submission, November 2007, p. 5.
- ⁵² South Asia Forum for Human Rights, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ⁵³ Tripura People's Democratic Front, UPR Submission, November 2007, p. 2. See also Christian Solidarity Worldwide, UPR Submission, November 2007, p. 6.
- ⁵⁴ Open Doors, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ⁵⁵ Tripura People's Democratic Front, UPR Submission, November 2007, p. 4-5. See also Interfaith International, UPR Submission, November 2007, pp.1-6.
- ⁵⁶ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 5.
- ⁵⁷ Torture Prevention Centre India Trust (TOP), UPR Submission, November 2007, p. 4.
- ⁵⁸ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 5. See also Torture Prevention Centre India Trust, UPR Submission, November 2007, p. 4.
- ⁵⁹ Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YCSRR), UPR Submission, November 2007, p. 4.
- ⁶⁰ Centre for Reproductive Rights, UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ⁶¹ Joint submission by Sampada Gramin Mashila Santstha and VAMP, UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ⁶² Christian Solidarity Worldwide, UPR Submission, November 2007, p. 4. See also See also Asian Legal Resource Centre, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ⁶³ National Human Rights Commission, UPR Submission, para.17.
- ⁶⁴ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Canter for Human Rights, November 2007, p. 6.
- ⁶⁵ National Human Rights Commission, UPR submission, para. 23.
- ⁶⁶ Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, UPR Submission, November 2007, pp. 2-3.
- ⁶⁷ Commonwealth's Human Rights Initiative, UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ⁶⁸ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 8.
- ⁶⁹ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 2.
- ⁷⁰ Commonwealth Human Rights Initiative, UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ⁷¹ Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ⁷² Human Rights Watch, UPR Submission, November 2007, pp. 1-2. See also Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ⁷³ Human Rights Watch, UPR Submission, November 2007, p. 2. See also South Asia Forum for Human Rights, UPR Submission, November 2007, pp. 1-2 and 4. See also Liberation, UPR Submission, November 2007, p. 5-6.
- ⁷⁴ Committee on Human Rights Manipur, UPR Submission, November 2007, para. 10.
- ⁷⁵ Centre for Organisation Research & Education, UPR Submission, November 2007, para 13.
- ⁷⁶ World Peace Forum, UPR Submission, November 2007, p. 7.
- ⁷⁷ Human Rights Watch, UPR Submission, November 2007, pp. 3-4.
- ⁷⁸ World Barua Organization, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ⁷⁹ Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 5.
- ⁸⁰ Joint submission by Women's Research & Action Group and 23 other NGOs, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ⁸¹ Ensaaf, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ⁸² Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ⁸³ National Human Rights Commission, UPR Submission, para 9.
- ⁸⁴ Ensaaf, UPR Submission, November 2007, pp. 1-2.

-
- ⁸⁵ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 6.
- ⁸⁶ Joint submission by Partners for Law in Development and 16 other NGOs Partners, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ⁸⁷ The Becket Fund for Religious Liberty, UPR Submission, November 2007, p. 1, 3-4.
- ⁸⁸ Christian Solidarity Worldwide, UPR Submission, November 2007, p. 5.
- ⁸⁹ European Centre for Law and Justice, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ⁹⁰ Commonwealth's Human Rights Initiative, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ⁹¹ Reporters Without Borders, UPR Submission, November 2007, p. 1-3.
- ⁹² Front Line, UPR Submission, November 2007, p. 4.
- ⁹³ Commonwealth's Human Rights Initiative, UPR Submission, November 2007, p. 3. See also Action Aid India, UPR Submission, November 2007, p. 5.
- ⁹⁴ Centre for Organisation Research & Education, UPR Submission, November 2007, para 8.
- ⁹⁵ Front Line, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ⁹⁶ Front Line, UPR Submission, November 2007, p. 4.
- ⁹⁷ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights. Peoples' Forum for UPR in India, November 2007, page 3.
- ⁹⁸ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 6.
- ⁹⁹ Centre for Reproductive Rights, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ¹⁰⁰ Centre for Reproductive Rights, UPR Submission, November 2007, p. 2.
- ¹⁰¹ Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YCSRR), UPR Submission, November 2007, paras. 3 and 19.
- ¹⁰² Society for Threatened Peoples, UPR Submission, November 2007, p. 4.
- ¹⁰³ National Human Rights Commission, UPR Submission, para. 24.
- ¹⁰⁴ Food First Information and Action Network, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ¹⁰⁵ Food First Information and Action Network, UPR Submission, November 2007, p. 3-4.
- ¹⁰⁶ Asian Legal Resource Centre, UPR Submission, November 2007, p. 5-6.
- ¹⁰⁷ Food First Information and Action Network, UPR Submission, November 2007, p. 5.
- ¹⁰⁸ Kashmir Institute of International Relations, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ¹⁰⁹ Action Aid India, UPR Submission, November 2007, p. 5.
- ¹¹⁰ Joint submission by People's Forum for UPR, presented by Asia Centre for Human Rights, November 2007, p. 7.
- ¹¹¹ Society for Threatened Peoples, UPR Submission, November 2007, p. 1. See also World Organization Against Torture, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ¹¹² Amnesty International, UPR Submission, November 2007, p. 4.
- ¹¹³ Action Aid India, UPR Submission, November 2007, p. 1. See also Amnesty International, UPR Submission, November 2007, pp. 4-5.
- ¹¹⁴ Norwegian Refugee Council (Internal Displacement Monitoring Centre), UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ¹¹⁵ Joint submission by Asian Indigenous & Tribal Peoples Network and International Working Group on Indigenous Affairs, UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ¹¹⁶ Joint submission by Asian Indigenous & Tribal Peoples Network and International Working Group on Indigenous Affairs, UPR Submission, November 2007, p. 3.
- ¹¹⁷ Norwegian Refugee Council (Internal Displacement Monitoring Centre), UPR Submission, November 2007, p. 1.
- ¹¹⁸ Norwegian Refugee Council (Internal Displacement Monitoring Centre), UPR Submission, November 2007, pp. 5-6.
- ¹¹⁹ Norwegian Refugee Council (Internal Displacement Monitoring Centre), UPR Submission, November 2007, p. 1.

¹²⁰ Norwegian Refugee Council (Internal Displacement Monitoring Centre), UPR Submission, November 2007, p. 6.

¹²¹ Action Aid India, UPR Submission, November 2007, p. 6.

¹²² submission by the International Movement against All Forms of Discrimination and Racism and the Lutheran World Federation in association with the National Campaign on Dalit Human Rights and the International Dalit Solidarity Network, UPR Submission, November 2007, p. 3.

¹²³ South Asia Forum for Human Rights, UPR Submission, November 2007, p. 1.
